



# Asamblea General

Distr. general  
22 de julio de 2022  
Español  
Original: inglés

**Consejo de Derechos Humanos**  
**Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones**  
**Forzadas o Involuntarias**  
**127º período de sesiones**  
9 a 13 de mayo de 2022

## **Comunicaciones transmitidas, casos examinados, observaciones y otras actividades realizadas por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias\***

### **I. Comunicaciones**

1. Entre el 11 de febrero y el 13 de mayo de 2022, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias transmitió 26 casos con arreglo a su procedimiento de acción urgente a la Arabia Saudita (4), Egipto (2), la Federación de Rusia (13) y el Pakistán (7).
2. El Grupo de Trabajo también decidió transmitir un caso equivalente a una desaparición forzada con arreglo a su procedimiento de acción humanitaria urgente al Ejército Nacional Libio<sup>1</sup>.
3. En su 127º período de sesiones, celebrado en Ginebra del 9 al 13 de mayo de 2022, el Grupo de Trabajo decidió transmitir 44 nuevos casos denunciados de desaparición forzada a la Arabia Saudita (2), Azerbaiyán (2), Bangladesh (2), China (3), Egipto (1), Irán (República Islámica del) (2), el Pakistán (24), la República Árabe Siria (6) y Uganda (3).
4. El Grupo de Trabajo esclareció 44 casos, en la Arabia Saudita (4), Egipto (16), la Federación de Rusia (1), Irán (República Islámica del) (2), Kuwait (1), el Pakistán (15), Türkiye (1), el Uruguay (1), Uzbekistán (2) y Venezuela (República Bolivariana de) (1). En total, se dieron por esclarecidos 25 casos sobre la base de la información transmitida por los Gobiernos y 19 casos gracias a la información facilitada por otras fuentes.
5. Entre el 11 de febrero y el 13 de mayo de 2022, el Grupo de Trabajo transmitió 15 comunicaciones, la mayor parte de ellas junto con otros mecanismos de procedimientos especiales. Esas comunicaciones consistieron en tres cartas de intervención inmediata, dirigidas a Bangladesh (1) y México (1); dos llamamientos urgentes conjuntos, enviados a Trinidad y Tabago (1) y a Ucrania (1); y 11 cartas de denuncia conjuntas, enviadas a Bangladesh (1), el Brasil (1), China (1), Etiopía (1), Gambia (1), los Países Bajos (1), Polonia (1), Sri Lanka (1), la República Árabe Siria (1) y Túnez (1), así como a otros actores (Consejo Ejecutivo de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria) (1).

\* Los anexos del presente documento se reproducen tal como se recibieron, únicamente en el idioma en que se presentaron.

<sup>1</sup> El Grupo de Trabajo subraya que el hecho de que haya remitido casos al Ejército Nacional Libio no implica en absoluto juicio alguno sobre la condición jurídica de territorios, ciudades o zonas, ni de sus autoridades.



6. En el período de sesiones, el Grupo de Trabajo examinó y aprobó seis denuncias generales relativas al Brasil, la Federación de Rusia, Rwanda, Sri Lanka, Türkiye y Uganda (véase el anexo III). También examinó la cuestión de las futuras y posibles visitas a países, incluida su próxima visita al Uruguay, del 7 al 14 de julio de 2022. El Grupo de Trabajo también celebró debates preliminares acerca de varios proyectos, entre ellos una reunión de expertos sobre su actual enfoque temático, a saber, las nuevas tecnologías y las desapariciones forzadas. El Grupo de Trabajo debatió sobre su informe anual y las adiciones de este, que se presentarán al 51<sup>er</sup> período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en septiembre de 2022, y aprobó el estudio para conmemorar el 30<sup>o</sup> aniversario de la aprobación de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que también se presentará al Consejo en septiembre de 2022.

## II. Otras actividades

7. En el período de sesiones, el Grupo de Trabajo dio la bienvenida a la nueva miembro del Grupo de Trabajo de la Región de Asia y el Pacífico, Angkhana Neelapaijit, que asumió sus funciones el 1 de mayo de 2022, en sustitución de Tae-Ung Baik, a quien el Grupo de Trabajo agradece su dedicación y servicio.

8. El Grupo de Trabajo mantuvo reuniones virtuales y presenciales con familiares de personas desaparecidas y con representantes de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de esta cuestión. También escuchó una exposición acerca de los Principios de Méndez sobre Entrevistas Efectivas para Investigación y Recopilación de Información, que el Grupo de Trabajo apoya y tendrá en cuenta en sus recomendaciones a los Estados.

9. El Grupo de Trabajo también celebró reuniones durante su período de sesiones con representantes de los Gobiernos de Chipre, España, el Japón y Portugal.

10. Durante el período de sesiones, el Grupo de Trabajo también decidió publicar un boletín periódico<sup>2</sup>, con el propósito de reforzar sus vínculos y contactos con víctimas, organizaciones de la sociedad civil, expertos, autoridades estatales y otras partes interesadas, así como de informar al público sobre su labor.

11. En el anexo IV figura una lista de otras actividades realizadas por el Grupo de Trabajo durante el período a que se refiere el informe.

## III. Información relativa a las desapariciones forzadas o involuntarias en los Estados examinados por el Grupo de Trabajo durante el período de sesiones

### Azerbaiyán

#### Procedimiento ordinario

12. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Narek Hovhannisyan, ciudadano armenio presuntamente capturado por las fuerzas armadas de Azerbaiyán en octubre de 2020 durante el reciente conflicto en la región de Nagorno Karabaj y sus alrededores;

b) Nerses Iskanyan, ciudadano armenio presuntamente capturado por las fuerzas armadas de Azerbaiyán en noviembre de 2020 durante el reciente conflicto en la región de Nagorno Karabaj y sus alrededores.

<sup>2</sup> Véase [www.ohchr.org/en/node/102736](http://www.ohchr.org/en/node/102736).

## Bangladesh

### Procedimiento ordinario

13. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Isruq Ahmed Fahim, presuntamente secuestrado el 26 de agosto de 2017 en Satmasjid Road, Dhanmondi, Daca, por agentes presuntamente asociados al Batallón de Acción Rápida, una subdivisión de la Policía de Bangladesh;

b) Ahmad Bin Quasem, presuntamente detenido el 5 de agosto de 2016 en una redada en su domicilio de Daca por agentes del Batallón de Acción Rápida.

### Carta de denuncia conjunta

14. El 22 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la profanación y destrucción del monasterio budista de Gayanasarana, situado en Falaharia, en el distrito de Chittagong, los actos de violencia cometidos contra los monjes del lugar, pertenecientes a la minoría budista, que desembocaron en la desaparición forzada y posterior muerte por malos tratos de Ronankor Vikku, y la prolongada detención y el acoso judicial del superior del monasterio, el Venerable Saranankar Mahathera<sup>3</sup>.

### Carta de intervención inmediata y respuesta

15. El 21 de febrero de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, un llamamiento urgente en relación con los presuntos actos de intimidación y acoso contra familiares de personas desaparecidas, defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Bangladesh por sus actividades y su cooperación con organismos internacionales y mecanismos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos<sup>4</sup>.

16. El 12 de mayo de 2022 el Gobierno respondió al llamamiento urgente conjunto enviado el 21 de febrero de 2022<sup>5</sup>.

### Comunicado de prensa

17. El 14 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que pedía a Bangladesh que pusiera fin de inmediato a las represalias contra los defensores de los derechos humanos y los familiares de las personas objeto de desaparición forzada por su labor de activismo y su cooperación con los órganos internacionales de derechos humanos y los mecanismos de las Naciones Unidas<sup>6</sup>.

## Brasil

### Carta de denuncia conjunta

18. El 27 de abril de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la sentencia del Tribunal Supremo Federal del Brasil, de 11 de mayo de 2020, por la que se denegaba la extradición de una persona a la Argentina para la investigación de cuatro causas judiciales relacionadas entre sí

<sup>3</sup> Véase BGD 1/2022. Todas las comunicaciones y las correspondientes respuestas que se mencionan en el presente documento pueden consultarse en <https://spcommreports.ohchr.org/Tmsearch/TMDocuments>.

<sup>4</sup> Véase BGD 2/2022.

<sup>5</sup> Véase la respuesta a BGD 2/2022.

<sup>6</sup> Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), "UN experts urge Bangladesh to end reprisals against human rights defenders and relatives of the disappeared", comunicado de prensa, 14 de marzo de 2022.

sobre crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1979<sup>7</sup>.

### **Denuncia general**

19. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y violaciones observados en la aplicación en el Brasil de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las denuncias se refieren principalmente a los cambios legislativos que amplían la competencia de la jurisdicción militar para investigar y perseguir los delitos cometidos por personal militar (véase el anexo III).

## **China**

### **Procedimiento ordinario**

20. Con arreglo a su procedimiento ordinario, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno tres casos referidos a la misma familia, relativos a Lee Hong-Gi, Soon-Nyeo Ryang y Tae-In Lee, nacionales de la República Popular Democrática de Corea, que presuntamente fueron detenidos el 6 de enero de 2021 por agentes de la seguridad pública de China en Shenyang, provincia de Liaoning. Según se informa, en abril de 2021 todos ellos desaparecieron de la prisión de Yanji, en la provincia de Jilin (China).

21. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se remitieron copias de los casos pertinentes a los Gobiernos del Japón y de la República Popular Democrática de Corea.

### **Información facilitada por el Gobierno**

22. El 14 de marzo de 2022 y el 8 de abril de 2022, el Gobierno transmitió información acerca de cuatro casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

### **Información facilitada por las fuentes**

23. Las fuentes facilitaron información sobre 21 casos pendientes, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

### **Carta de denuncia conjunta y respuesta**

24. El 17 de febrero de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre el arresto, la detención y la posterior desaparición forzada del escritor tibetano Lobsang Lhundup (seudónimo de Dhi Lhaden), el músico Lhundrup Drakpa y el maestro Rinchen Kyi, supuestamente en relación con sus actividades culturales en favor de la lengua y la cultura de la minoría tibetana<sup>8</sup>.

25. El 14 de abril de 2022 el Gobierno respondió a la carta de denuncia conjunta enviada el 17 de febrero de 2022<sup>9</sup>.

## **Colombia**

### **Información facilitada por el Gobierno**

26. El 8 de abril de 2022 el Gobierno transmitió información relativa a un caso, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

---

<sup>7</sup> Véase BRA 5/2022.

<sup>8</sup> Véase CHN 14/2021.

<sup>9</sup> Véase la respuesta a CHN14/2021.

## Chipre

### Comunicado de prensa

27. El 12 de abril de 2022, al término de su visita oficial a Chipre, el Grupo de Trabajo emitió un comunicado de prensa en el que instaba a acelerar los avances para hacer efectivos los derechos de los familiares de las personas desaparecidas en Chipre. Aunque reconoció los considerables progresos realizados, en particular gracias a la ya larga labor del Comité sobre las Personas Desaparecidas en Chipre, de composición bicomunal, el Grupo de Trabajo se refirió a la ralentización del proceso de búsqueda y a las importantes dificultades que quedan por resolver<sup>10</sup>.

## Ecuador

### Información facilitada por el Gobierno

28. El 25 de abril de 2022 el Gobierno transmitió información relativa a cinco casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

## Egipto

### Procedimiento de acción urgente

29. El 8 de marzo de 2022, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, el Grupo de Trabajo transmitió un caso al Gobierno, relativo a Omar Maher Abdel Zaher El Desouky, que presuntamente fue detenido el 20 de diciembre de 2021 en el aeropuerto internacional de El Cairo por las fuerzas de seguridad de la policía y trasladado a un lugar desconocido.

30. El 29 de abril de 2022, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, el Grupo de Trabajo transmitió un caso al Gobierno, relativo a Karim Yaser Abdalnabi Abdulazim, que presuntamente fue detenido el 12 de abril de 2022 a las 1.30 horas por las fuerzas de seguridad de la provincia de Al Sharqiyyah en un supermercado en el que trabajaba y luego fue trasladado a un lugar desconocido.

### Procedimiento ordinario

31. Con arreglo a su procedimiento ordinario, el Grupo de Trabajo transmitió un caso al Gobierno, relativo a Mahmoud Mamdouh Fouad Abdelnabi, que presuntamente fue detenido el 1 de agosto de 2017 en el aeropuerto internacional de El Cairo por agentes de seguridad del Estado. Fue visto por última vez en el centro penitenciario Tora Reception en noviembre de 2021.

### Aplicación de la norma de los seis meses

32. Basándose en la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses al caso relativo a Omar Maher Abdel Zaher El Desouky.

### Esclarecimiento basado en la información facilitada por el Gobierno

33. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses, los 14 casos relativos a las siguientes personas:

- a) Mostafa Fouad Abdelawad, que fue puesto en libertad;
- b) Sobhi Abdelhadi Abdelhakim, que fue puesto en libertad;
- c) Amer Fadl Abdelnaim, que fue puesto en libertad;
- d) Mohamed Abdessalam, que fue puesto en libertad;

<sup>10</sup> ACNUDH, “UN experts: Urgent solution of the missing persons issue essential both for relatives and future of Cyprus”, comunicado de prensa, 12 de abril de 2022.

- e) Imad Atifi Hammam, que fue puesto en libertad;
- f) Nasser Khayri Shahata Al Mahdi, que fue puesto en libertad;
- g) Majdi Mohamed Ali Mohamed Farghali, que fue puesto en libertad;
- h) Nasser Suleiman Yassin Abdenasser, que fue puesto en libertad;
- i) Maysara Mahmoud Fouad Abdelmoniem, que fue puesto en libertad;
- j) Abdulllah Kilany Abdeljaber Abdelaal, actualmente recluso en la prisión de alta seguridad de Gamasa;
- k) Yahia Osama Yahia Abu Salama, actualmente recluso en la prisión de alta seguridad Tora 2;
- l) Islam Mohamed Temsah Metwally, actualmente recluso en la prisión de alta seguridad Tora 2;
- m) Ahmed Mohamed Mansi El-Sayed Salem, actualmente recluso en la prisión de alta seguridad de Istiqbal;
- n) Abdulaziz Gamal Metwally Ibrahim, actualmente recluso en la prisión de alta seguridad de Tora.

#### **Información facilitada por el Gobierno**

34. El 21 de abril de 2022 el Gobierno transmitió información relativa a dos casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

#### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes**

35. Basándose en la información proporcionada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos los casos de Omar Adel Abdelfattah Mohamed Abdelsalam y Motaz Sobaih, que actualmente se encuentran reclusos en un lugar conocido.

#### **Información facilitada por las fuentes**

36. Las fuentes facilitaron información sobre siete casos pendientes, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

#### **Suspensión**

37. El Grupo de Trabajo resolvió, de manera excepcional y con arreglo al párrafo 28 de sus métodos de trabajo, suspender el examen de 14 casos pendientes, relativos a las siguientes personas:

- a) Mohammad Ali Mohammad Farghali;
- b) Abdel-Nasir Mohammad, Abdel-Wahhab;
- c) Nahil Mohammad Ali H. Al-Battugi;
- d) Sayyid Ali Hassan Ibrahim;
- e) Mansour, Al-Kikhia;
- f) Mostafa Moh'd Abha Authman;
- g) Amgad, El Shenawy;
- h) Mohamed A'tiya Hafez Ibrahim;
- i) Ahmed 'Abd Al-Rahman Hussein;
- j) Goma'a Mohamed Abdel Aziz;
- k) Diaa El-Din Gad;
- l) Adel Hassan Salih Musa;

- m) Reda, Fathy Mohamed Ibrahim;
- n) Samy Bakry Orani Morsi.

38. No obstante, los casos pueden reabrirse en cualquier momento, de conformidad con el párrafo 29 de los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo<sup>11</sup>.

### **Comunicado de prensa**

39. El 13 de abril de 2022 el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que deploraba las recientes y continuas expulsiones colectivas de solicitantes de asilo eritreos por parte de Egipto, y pedía a las autoridades que cesaran de inmediato cualquier otro retorno forzoso<sup>12</sup>.

## **El Salvador**

### **Información facilitada por el Gobierno**

40. El 10 de mayo de 2022 el Gobierno transmitió información relativa a ocho casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

## **Etiopía**

### **Carta de denuncia conjunta y respuesta**

41. El 14 de febrero de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a las denuncias de discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia contra miembros del grupo étnico de Tigré, así como otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas contra ellos, desde el estallido del conflicto entre el Gobierno Federal de Etiopía y sus fuerzas armadas y el Frente de Liberación Popular de Tigré en noviembre de 2020<sup>13</sup>.

42. El 14 de abril de 2022 el Gobierno respondió a la carta de denuncia conjunta enviada el 14 de febrero de 2022<sup>14</sup>.

### **Observaciones**

43. El Grupo de Trabajo desea agradecer al Gobierno su exhaustiva respuesta a la carta de denuncia conjunta (ETH 3/2021). El Grupo de Trabajo acoge con satisfacción las medidas adoptadas por el Gobierno para hacer frente a las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, relacionadas con el conflicto en las regiones de Tigré, Afar y Amhara, aunque sigue preocupado por las continuas denuncias de desapariciones forzadas, en particular en Tigré.

44. El Grupo de Trabajo expresa la esperanza de que el Gobierno cumpla con sus obligaciones de diligencia debida y realice investigaciones eficaces, imparciales, independientes, transparentes y exhaustivas, castigue a los autores y ofrezca reparaciones a las víctimas o a sus familias. El Grupo de Trabajo señala que la detención prolongada en régimen de incomunicación y toda privación de libertad seguida de la negativa a reconocerla o de la ocultación de la suerte o el paradero de la persona desaparecida son elementos constitutivos de la desaparición forzada. Como se estipula en los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas<sup>15</sup>, la búsqueda de las personas desaparecidas es una obligación permanente, que debe comenzar sin dilación, ser independiente e imparcial e interrelacionarse con la investigación penal. El Grupo de Trabajo recuerda que, en virtud del derecho internacional, el Estado tiene la responsabilidad primordial de garantizar que los

<sup>11</sup> A/HRC/WGEID/102/2

<sup>12</sup> ACNUDH, "Egypt: UN experts condemn expulsions of Eritrean asylum-seekers despite risks of torture, arbitrary detention and enforced disappearance", comunicado de prensa, 13 de abril de 2022.

<sup>13</sup> Véase ETH 3/2021.

<sup>14</sup> Véase la respuesta a ETH 3/2021.

<sup>15</sup> CED/C/7.

familiares, los representantes legales, los periodistas y la sociedad civil que trabajan para la protección de los derechos humanos y de las personas víctimas de desaparición forzada estén libres de toda forma de violencia, acoso o discriminación de cualquier tipo.

## **Gambia**

### **Carta de denuncia conjunta**

45. El 31 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta decisión del Comité de Recomendación de Amnistía de la Comisión de la Verdad, la Reparación y la Reconciliación de recomendar la concesión de la amnistía a Sanna Sabally, acusado de graves violaciones de los derechos humanos que pueden llegar a constituir crímenes de lesa humanidad<sup>16</sup>.

## **Honduras**

### **Información facilitada por un Gobierno**

46. El 7 de febrero de 2022 el Gobierno de El Salvador transmitió información sobre dos casos incluidos en los registros de Honduras, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

47. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se remitieron copias de los casos pertinentes al Gobierno de El Salvador.

## **Irán (República Islámica del)**

### **Procedimiento ordinario**

48. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno dos casos relativos a:

a) Hadi Rashedi, nacional de la República Islámica del Irán y miembro de la minoría étnica árabe, que fue presuntamente detenido en la escuela Doctor Hesabi, en la ciudad de Bandar Khomeini, por cinco agentes de los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria de la República Islámica del Irán el 26 de febrero de 2011. Se ha informado de que el Sr. Rashedi estuvo recluso en la cárcel desde febrero de 2011 hasta 2013 y fue visto por última vez en la prisión de Karun, en la ciudad de Ahwaz, antes de ser trasladado a un lugar desconocido;

b) Hashem Shaabani Nejhad, nacional de la República Islámica del Irán y miembro de la minoría étnica árabe, que fue presuntamente detenido por los servicios de inteligencia de la Guardia Revolucionaria cuando se dirigía a su domicilio desde la escuela Shaikh Ansari de Ramshir, en Khalaf Abad. Se ha informado de que el Sr. Shaabani Nejhad estuvo detenido desde 2011 hasta que fue visto por última vez en la prisión de Karun, en la ciudad de Ahwaz, el 6 de diciembre de 2013, antes de ser trasladado a un lugar desconocido.

### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por el Gobierno**

49. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Adwaiy Muhammed, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Véase GMB 2/2022.

<sup>17</sup> A/HRC/WGEID/125/1, párr. 65.



### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes**

50. Basándose en la información proporcionada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Foad Abufatleh, quien al parecer había sido puesto en libertad.

## **Jordania**

### **Aplicación de la norma de los seis meses**

51. Basándose en la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses al caso relativo a Hamdan Zouhair.

## **Libia**

### **Procedimiento de acción urgente**

52. En septiembre de 2019 el Grupo de Trabajo anunció que empezaría a documentar las violaciones equivalentes a actos de desaparición forzada perpetrados por agentes no estatales. En consecuencia, el Grupo de Trabajo examinó uno de esos casos presuntamente perpetrado en la parte del territorio de Libia que se encuentra bajo control del Ejército Nacional Libio.

53. En el marco de su procedimiento de acción urgente, el Grupo de Trabajo transmitió al Ejército Nacional Libio una comunicación relativa a Osama Muhammad Saleh Al Ghafir Al Obeid, coronel del ejército libio, presuntamente detenido el 12 de julio de 2016 en la zona de Sidra durante una operación dirigida por las milicias del general Khalifa Haftar al mando del general de brigada Mahmoud Ahmouda. Fue visto por última vez el 15 de febrero de 2022 en la prisión de la Brigada Tariq bin Ziyad por un exrecluso.

54. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se ha remitido al Gobierno de Libia una copia del caso.

## **México**

### **Carta de intervención inmediata**

55. El 9 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de intervención inmediata en relación con las agresiones sufridas por Alma Rosa Villalobos Valdés y miembros de su familia, quienes fueron presuntamente detenidos, golpeados y sometidos a otros malos tratos por agentes de la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato. La Sra. Villalobos Valdés es miembro de la organización Hasta Encontrarte, colectivo dedicado a la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres víctimas de desaparición u homicidio en el estado de Guanajuato<sup>18</sup>.

### **Observaciones**

56. El Grupo de Trabajo sigue preocupado por la continua recepción de denuncias sobre actos de acoso, amenazas y violencia perpetrados contra familiares y colectivos que buscan a personas desaparecidas en México, así como por la criminalización y persecución de activistas y organizaciones de la sociedad civil que los apoyan. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda el artículo 13 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, según el cual toda persona que sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada tiene derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. En el artículo 13 también se establece que se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante,

<sup>18</sup> Véase MEX 2/2022.

el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia.

## **Países Bajos**

### **Carta de denuncia conjunta**

57. El 2 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia relativa a la presunta detención automática de inmigrantes y solicitantes de asilo venezolanos, incluidos niños, que llegan de forma irregular a Curasao, donde son retenidos en pésimas condiciones de detención durante períodos indefinidos<sup>19</sup>.

58. El 29 de abril de 2022 el Gobierno respondió a la carta de denuncia conjunta enviada el 2 de marzo de 2022<sup>20</sup>.

## **Pakistán**

### **Procedimiento de acción urgente**

59. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno siete casos relativos a:

- a) Muhammad Akbar Khan, presuntamente secuestrado el 26 de marzo de 2022 en la mezquita de Balosan, Mohallah Balili, distrito de Quetta, Baluchistán, por agentes del servicio secreto militar pakistaní;
- b) Gulnar Jan, presuntamente secuestrado el 5 de enero de 2022 en Tehsil Wana, distrito de Waziristán del Sur, Jaiber Pastunjuá, por miembros del ejército pakistaní;
- c) Raza Ullah, presuntamente secuestrado el 31 de enero de 2022 en su pueblo del distrito de Waziristán del Sur, Jaiber Pastunjuá, por miembros del ejército pakistaní;
- d) Un joven de 17 años, nacional de Pakistán, presuntamente secuestrado el 4 de febrero de 2022 en su pueblo, cerca del río Tochi, en el distrito de Waziristán del Norte, en Jaiber Pastunjuá, por miembros del ejército pakistaní;
- e) Salam Khan, presuntamente secuestrado el 16 de febrero de 2022 en Burrund, Oficina de Correos de Tehsil Tiarza, distrito de Waziristán del Sur, Jaiber Pastunjuá, por miembros del ejército pakistaní;
- f) Deen Rasool, presuntamente secuestrado el 22 de febrero de 2022 en Islamabad, por agentes militares y de los servicios secretos pakistaníes;
- g) Rahim Ullah, presuntamente secuestrado el 25 de febrero de 2022 en el poblado de Bannu, distrito de Bannu, Jaiber Pastunjuá, por miembros del ejército pakistaní.

### **Procedimiento ordinario**

60. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno 24 casos (véase el anexo I).

61. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se ha remitido al Gobierno del Afganistán una copia de un caso.

### **Aplicación de la norma de los seis meses**

62. El Gobierno facilitó información sobre tres casos pendientes, con arreglo a la cual el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses.

<sup>19</sup> Véase NLD 2/2022.

<sup>20</sup> Véase la respuesta a NLD 2/2022.

### **Información facilitada por el Gobierno**

63. Los días 6 de enero, 20 de abril, 28 de abril y 29 de abril de 2022 el Gobierno transmitió información relativa a 27 casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por el Gobierno**

64. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Muhammed Idris Khattak, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses<sup>21</sup>. Según se informa, el Sr. Khattak se encuentra recluso.

### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes**

65. Basándose en la información proporcionada por diversas fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos 14 casos, relativos a:

- a) Ulfat Altaf, que según se informa fue puesto en libertad;
- b) Sajjad, que según se informa fue puesto en libertad;
- c) Abid, que según se informa fue puesto en libertad;
- d) Farhad, que según se informa fue puesto en libertad;
- e) Dost Khan, que según se informa fue puesto en libertad, pero posteriormente fue ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado;
- f) Mir, que según se informa fue puesto en libertad;
- g) Sadam Hussain, que según se informa fue ejecutado extrajudicialmente por agentes del Estado;
- h) Khuda Bakhsh, que según se informa fue puesto en libertad;
- i) Sudheer, que según se informa fue puesto en libertad;
- j) Nadir Ali, que según se informa fue puesto en libertad;
- k) Zubair Ahmed, que según se informa fue puesto en libertad;
- l) Talal Ahmed, que según se informa fue puesto en libertad;
- m) Nasir Hussain, que según se informa fue puesto en libertad;
- n) Muslim, que según se informa fue puesto en libertad.

### **Información facilitada por las fuentes**

66. Las fuentes facilitaron información sobre dos casos pendientes, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

### **Casos duplicados**

67. El Grupo de Trabajo advirtió que el caso relativo a Ehsan Ullah había sido registrado dos veces y decidió eliminar el duplicado. El caso del Sr. Ullah sigue sin haberse esclarecido.

### **Observaciones**

68. El Grupo de Trabajo está preocupado por la información que ha recibido en relación con actos de acoso, intimidación y amenazas cometidos contra familiares de personas objeto de desaparición forzada, que han provocado demoras en la denuncia de las desapariciones de esas personas. A este respecto, el Grupo de Trabajo recuerda el artículo 13 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece que toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada tendrá derecho a denunciar los hechos

<sup>21</sup> A/HRC/WGEID/125/1, párr. 99.

ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Cada vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal<sup>22</sup>.

69. En el artículo 13 también se establece que se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos los testigos, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia.

## Perú

### Comunicados de prensa

70. El 23 de febrero de 2022 el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que se congratulaba de la declaración como patrimonio cultural del monumento limeño El Ojo que Lloro, construido para recordar a los miles de víctimas de las décadas de violencia en el Perú, y en el que pedía a las autoridades que redoblaran sus esfuerzos para proteger el lugar junto con sus defensores<sup>23</sup>.

71. El 2 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que expresaba su consternación por la decisión del Tribunal Constitucional del Perú de restablecer el indulto presidencial y poner en libertad al expresidente Alberto Fujimori, afirmando que ello representaba un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno<sup>24</sup>.

## Polonia

### Carta de denuncia conjunta

72. El 30 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre la situación de las personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidos familias y niños, que intentaban entrar en Polonia por su frontera con Belarús. Preocupaban entre otras las personas presuntamente varadas en la frontera y las que se encontraban retenidas en centros de detención en Polonia, donde al parecer estaban sometidas a pésimas condiciones de detención<sup>25</sup>.

73. El 27 de mayo de 2022 el Gobierno respondió a la carta de llamamiento urgente conjunto enviada el 30 de marzo de 2022<sup>26</sup>.

## Federación de Rusia

### Procedimiento de acción urgente

74. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno 26 casos (véase el anexo II).

75. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se remitieron copias de los casos pertinentes al Gobierno de Ucrania. Se enviaron copias de dos casos al

<sup>22</sup> Véase también CED/C/7, principio 6.

<sup>23</sup> ACNUDH, “Perú: Expertos de la ONU aplauden el monumento ‘El Ojo que Lloro’ y advierten sobre la violencia ‘negacionista’”, comunicado de prensa, 23 de febrero de 2022.

<sup>24</sup> ACNUDH, “Perú: La liberación de Fujimori socava el acceso a la justicia para las víctimas - expertos de la ONU”, comunicado de prensa, 22 de marzo de 2022.

<sup>25</sup> Véase POL 3/2022.

<sup>26</sup> Véase la respuesta a POL 3/2022.

Gobierno de Belarús. Se envió copia de un caso al Gobierno de los Estados Unidos de América.

#### **Aplicación de la norma de los seis meses**

76. El Gobierno facilitó información sobre un caso pendiente, con arreglo a la cual el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses.

#### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por el Gobierno**

77. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Magomed Gadaev, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses<sup>27</sup>.

#### **Información facilitada por el Gobierno**

78. El 12 de mayo de 2022 el Gobierno transmitió información relativa a tres casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

#### **Denuncia general**

79. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y violaciones observados en la aplicación en la Federación de Rusia de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las denuncias se refieren principalmente a desapariciones forzadas de representantes de las autoridades locales, periodistas, activistas de la sociedad civil, soldados ucranianos capturados y personal militar retirado de las fuerzas armadas, especialmente los que participaron en las hostilidades durante el período 2014-2021, así como de civiles, cometidas por las fuerzas armadas rusas y los grupos armados afines en los territorios ucranianos recientemente ocupados de las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kiev, Mykolaiv, Sumy, Khárkiv, Khersón, Poltava y Cherníhiv (véase el anexo III).

#### **Comunicados de prensa**

80. El 28 de febrero de 2022 el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que pedía a la Federación de Rusia que pusiera fin de inmediato a su agresión contra Ucrania y suspendiera su ataque militar innecesario y no provocado<sup>28</sup>.

81. El 8 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que pedía a la Federación de Rusia que pusiera fin de inmediato a su invasión de Ucrania, para evitar más derramamiento de sangre y pérdida de vidas. Los expertos afirmaron que los ataques intencionados contra civiles y bienes de carácter civil pueden constituir crímenes de guerra y que los responsables deben rendir cuentas y ser procesados<sup>29</sup>.

#### **Observaciones**

82. El Grupo de Trabajo está profundamente preocupado por los numerosos informes que ha recibido sobre desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas armadas rusas contra civiles, funcionarios locales, defensores de los derechos humanos, periodistas y sacerdotes en las zonas ocupadas de Ucrania desde el comienzo de la invasión. Según los informes, también se han producido desapariciones forzadas de prisioneros de guerra.

83. El Grupo de Trabajo reitera que, en virtud del derecho internacional humanitario consuetudinario, la desaparición forzada está prohibida. Asimismo, cada una de las partes en conflicto debe adoptar todas las medidas posibles para registrar y determinar el paradero de

<sup>27</sup> A/HRC/WGEID/125/1, párr. 113.

<sup>28</sup> ACNUDH, “UN experts call for end to Russian aggression against Ukraine and urgent protection of human rights”, comunicado de prensa, 28 de febrero de 2022.

<sup>29</sup> ACNUDH, “Ukraine: Protecting life must be a priority - UN human rights experts”, comunicado de prensa, 8 de marzo de 2022.

las personas dadas por desaparecidas a consecuencia de un conflicto armado y debe proporcionar a los familiares de esas personas toda la información que tenga sobre su suerte y paradero.

84. Además, el artículo 7 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas establece que ninguna circunstancia, cualquiera que sea, ya se trate de amenaza de guerra, estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otro estado de excepción, puede ser invocada para justificar las desapariciones forzadas. En este sentido, el Grupo de Trabajo subraya que no reconocer la privación de libertad a manos de agentes del Estado y negarse a reconocer la detención equivale a actos de desaparición forzada, cualquiera sea la duración de dicha privación de libertad u ocultamiento. El Grupo de Trabajo subraya también que las garantías procesales en el momento de la detención y durante las primeras horas de la privación de libertad son fundamentales para prevenir posibles violaciones de los derechos humanos. Estas salvaguardias incluyen la inscripción inmediata en el registro, el control judicial de la detención, la notificación inmediata a los familiares de la persona privada de libertad y el derecho de esta a ser defendida por un abogado de su elección.

85. Teniendo en cuenta la gravedad de la situación, el Grupo de Trabajo manifestó su deseo de reunirse con representantes de la Federación de Rusia durante el período de sesiones, pero ello fue en vano. Reitera su voluntad de mantener una reunión lo antes posible, recordando que el próximo período de sesiones del Grupo de Trabajo se celebrará del 19 al 28 de septiembre de 2022.

## **Rwanda**

### **Información facilitada por las fuentes**

86. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre dos casos pendientes, pero esta información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

### **Denuncia general**

87. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y violaciones observados en la aplicación en Rwanda de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las denuncias se refieren a la práctica de la desaparición forzada de opositores políticos, defensores de los derechos humanos, periodistas y otros presuntos rwandeses críticos del Gobierno, tanto dentro como fuera del país (véase el anexo III).

## **Arabia Saudita**

### **Procedimiento de acción urgente**

88. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento de acción urgente, transmitió al Gobierno cuatro casos relativos a:

a) Hemdullah Abduweli, nacional de China de etnia uigur, que presuntamente fue objeto de desaparición forzada de la prisión de Al Dhahban en Yeda, el 20 de marzo de 2022; el Sr. Abduweli había sido detenido anteriormente por la policía local saudita en la localidad de Al Masfalah, provincia de La Meca, el 20 de noviembre de 2020;

b) Nurmemet Rozi, nacional de China de etnia uigur, que presuntamente fue objeto de desaparición forzada de la prisión de Al Dhahban, en Yeda, el 20 de marzo de 2022; el Sr. Rozi había sido detenido anteriormente por la policía local saudita en la localidad de Al Masfalah, provincia de La Meca, el 20 de noviembre de 2020;

c) Abula Buheliqiemu, nacional de China de etnia uigur, que fue presuntamente detenida el 31 de marzo de 2022 cerca de La Meca, presuntamente por las autoridades de la Arabia Saudita con el fin de devolverla a China;

d) Baibure Miremaiti, la hija de 13 años de la Sra. Buheliqiemu, a la que presuntamente se llevaron las autoridades de la Arabia Saudita; se cree que la Sra. Miremaiti también puede haber sido deportada a China junto con su madre.

89. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se remitieron copias de los casos pertinentes al Gobierno de China.

#### **Procedimiento ordinario**

90. Con arreglo a su procedimiento ordinario, el Grupo de Trabajo transmitió un caso al Gobierno, relativo a Abdulwahhab Al-Doweesh, nacional de la Arabia Saudita que fue detenido el 14 de agosto de 2021 en la Escuela de Seguridad Nacional de Naif, en Riad, por agentes de la Presidencia de la Seguridad del Estado y trasladado a un lugar desconocido.

#### **Aplicación de la norma de los seis meses**

91. Basándose en la información facilitada por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió aplicar la norma de los seis meses a tres casos, relativos a Muhammad Afzal Asghar Ali, Muhammad Imran Muhammad Shafi y Muammar Gaddafi Muhammad Omar al-Qenawi.

92. De acuerdo con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se transmitieron copias de los casos relativos a Muhammad Afzal Asghar Ali y Muhammad Imran Muhammad Shafi al Gobierno del Pakistán, y una copia del caso relativo a Muammar Gaddafi Muhammad Omar al-Qenawi al Gobierno de Egipto.

#### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por el Gobierno**

93. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos los casos relativos a Meghnath Bhusal, Saud Faleh 'Awad 'al-'Anzi and Sultan Hamid Marzouk 'al-'Anzi,, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses<sup>30</sup>.

94. De conformidad con los métodos de trabajo del Grupo de Trabajo, se ha remitido al Gobierno de Nepal una copia del caso relativo a Meghnath Bhusal.

#### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por las fuentes**

95. Sobre la base de la información proporcionada por las fuentes, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Lina Alsharif, antes de que expirara el plazo prescrito por la norma de los seis meses<sup>31</sup>. La Sra. Alsharif está actualmente detenida en un lugar conocido.

#### **Información facilitada por las fuentes**

96. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre dos casos pendientes, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

#### **Observaciones**

97. El Grupo de Trabajo está especialmente preocupado por la presencia de una niña de 13 años y de mujeres entre las personas objeto de desaparición forzada. Desea recordar que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas especiales que respondan a la extrema vulnerabilidad de las personas afectadas, a la luz de las observaciones generales del Grupo de Trabajo sobre los niños y las desapariciones forzadas y sobre las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas<sup>32</sup>.

98. El Grupo de Trabajo está preocupado por las denuncias que ha recibido en relación con actos de represalia contra familiares de personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo desea recordar el artículo 13 de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que dispone que los Estados asegurarán a toda persona

<sup>30</sup> A/HRC/WGEID/125/1, párr. 119.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> A/HRC/WGEID/98/1 y A/HRC/WGEID/98/2.

que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Además, se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia.

## **España**

### **Información facilitada por las fuentes**

99. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

## **Sri Lanka**

### **Información facilitada por el Gobierno**

100. El 12 de abril de 2022 el Gobierno transmitió información relativa a cuatro casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

### **Información facilitada por las fuentes**

101. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

### **Carta de intervención inmediata**

102. El 22 de abril de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de intervención inmediata en relación con la presunta agresión y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía contra familiares de personas desaparecidas durante una protesta en Jaffna, que causó lesiones a varias mujeres. Las denuncias recibidas también hacen referencia a un contexto de aumento de la vigilancia y el acoso a los familiares de personas desaparecidas en Sri Lanka, incluso contra miembros de la minoría tamil, y a la obstrucción de sus actividades por parte de los organismos de seguridad<sup>33</sup>.

### **Denuncia general**

103. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y violaciones observados en la aplicación en Sri Lanka de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las denuncias se refieren principalmente a que los familiares de personas desaparecidas, especialmente en las provincias del norte del país, son sometidas cada vez más a acoso e intimidación, entre otras cosas mediante la vigilancia policial, y sufren interferencias en sus intentos de reunirse, celebrar aniversarios o protestar (véase el anexo III).

### **Comunicado de prensa**

104. El 2 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, emitió un comunicado de prensa en el que se pedía una moratoria inmediata en la aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo y se instaba al Gobierno a examinar y revisar de forma sustantiva la legislación para que se ajustara al derecho internacional de los derechos humanos<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Véase LKA 1/2022.

<sup>34</sup> ACNUDH, “Sri Lanka: Los expertos de la ONU piden la rápida suspensión de la Ley de Prevención del Terrorismo y la reforma de la ley antiterrorista”, comunicado de prensa, 2 de marzo de 2022.



## Observaciones

105. El Grupo de Trabajo está preocupado por las denuncias que ha recibido en relación con el aumento de los actos de acoso e intimidación de los familiares de personas desaparecidas, especialmente en las provincias del norte del país, entre otras cosas mediante la vigilancia policial y las interferencias en sus intentos de reunirse y realizar sus actividades relacionadas con los derechos humanos.

106. El Grupo de Trabajo recuerda el artículo 13, párrafos 3 y 5, de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, en los que se establece que se tomarán disposiciones para que todos los que participen en la investigación, incluidos el denunciante, el abogado, los testigos y los que realizan la investigación, estén protegidos de todo maltrato y todo acto de intimidación o represalia y para garantizar que todo maltrato, todo acto de intimidación o de represalia, así como toda forma de injerencias, en ocasión de la presentación de una denuncia o durante el procedimiento de investigación, sean castigados como corresponda.

107. El Grupo de Trabajo también recuerda su observación general sobre las mujeres afectadas por las desapariciones forzadas<sup>35</sup>, su informe sobre normas y políticas públicas para la investigación efectiva de las desapariciones forzadas<sup>36</sup> y su estudio sobre la desaparición forzada y los derechos económicos, sociales y culturales<sup>37</sup>.

## República Árabe Siria

### Procedimiento ordinario

108. El Grupo de Trabajo, con arreglo a su procedimiento ordinario, transmitió al Gobierno seis nuevos casos denunciados relativos a:

- a) Ahmad Tawouz, presuntamente detenido el 25 de mayo de 2015 por las fuerzas armadas sirias cerca del barrio de Salah al Din, en la ciudad de Aleppo;
- b) Ahmad Maqboul, presuntamente detenido en marzo de 2013 por las fuerzas armadas sirias durante una redada en su domicilio;
- c) Bashar Dabbak, presuntamente detenido el 29 de julio de 2012 en Damasco por agentes de inteligencia de la fuerza aérea con base en el aeropuerto de Mazzeh;
- d) Jihad Assaf, presuntamente detenido el 18 de octubre de 2012 por agentes al parecer afiliados al Departamento de Seguridad del Estado durante una redada en su barrio;
- e) Mohamad Al-Awad, presuntamente detenido el 31 de marzo de 2013 por las fuerzas armadas sirias en el puesto de control de Damasco-Al-Qutayfah y visto por última vez en junio de 2013 en el puesto de distrito núm. 227, al parecer administrado por las fuerzas de inteligencia militar;
- f) Osama Habbali, presuntamente detenido el 18 de agosto de 2012 por agentes de seguridad militar en la frontera entre la República Árabe Siria y el Líbano.

## Tailandia

### Información facilitada por las fuentes

109. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre 23 casos pendientes, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

<sup>35</sup> A/HRC/WGEID/98/2.

<sup>36</sup> A/HRC/45/13/Add.3, párrs. 60 a 68.

<sup>37</sup> A/HRC/30/38/Add.5, párrs. 23 a 32. Véase también CED/C/7, principio 14.

### **Reapertura de casos**

110. De conformidad con el párrafo 29 de sus métodos de trabajo, el Grupo de Trabajo decidió reabrir el caso de Sak Sae Ung, basándose en la información proporcionada por una fuente.

## **Trinidad y Tabago**

### **Llamamiento urgente conjunto**

111. El 25 de febrero de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una llamamiento urgente relativo a la práctica sostenida de devolución sumaria de migrantes por el Servicio de Guardacostas de Trinidad y Tabago, en particular un incidente reciente en el que se interceptó una embarcación donde viajaban 39 migrantes y solicitantes de asilo venezolanos, incluidos 10 niños, y al presunto uso de armas de fuego durante esa operación, que provocó la muerte de un niño de 1 año de edad y lesiones a su madre<sup>38</sup>.

## **Túnez**

### **Carta de denuncia conjunta**

112. El 17 de marzo de 2022 el Grupo de Trabajo transmitió, junto con otros mecanismos de procedimientos especiales, una carta de denuncia sobre el uso excesivo de la fuerza en las presuntas detenciones y desapariciones forzadas de Noureddine Bhiri y Fathi Beldi mientras se encontraban bajo arresto domiciliario, así como las presuntas represalias contra Abdelrazzak Al Kilani, abogado del Sr. Bhiri<sup>39</sup>.

## **Türkiye**

### **Información facilitada por el Gobierno**

113. El 10 de mayo de 2022 el Gobierno transmitió información relativa a tres casos, pero esa información se consideró insuficiente para darlos por esclarecidos.

### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por el Gobierno**

114. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Davut Altinkaynak, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses<sup>40</sup>.

### **Denuncia general**

115. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y violaciones observados en la aplicación en Türkiye de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las denuncias se refieren principalmente al hecho de que la desaparición forzada no esté tipificada como delito autónomo, lo que hace extremadamente difícil, si no prácticamente imposible, hacer responsables a los autores (véase el anexo III).

## **Uganda**

### **Procedimiento ordinario**

116. De acuerdo con su procedimiento ordinario, el Grupo de Trabajo transmitió al Gobierno tres nuevos casos denunciados, relativos a John Ddamulira, Vincent Nalumosy y

---

<sup>38</sup> Véase TTO 2/2022.

<sup>39</sup> Véase TUN 3/2022.

<sup>40</sup> A/HRC/WGEID/125/1, párr. 139.

una tercera persona presuntamente secuestrados por agentes al parecer asociados a los servicios de seguridad de Uganda durante el periodo previo a las elecciones generales celebradas en enero de 2021.

### **Denuncia general**

117. El Grupo de Trabajo recibió de fuentes fidedignas información sobre presuntos obstáculos y violaciones observados en la aplicación en Uganda de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Las denuncias se refieren a una campaña generalizada contra los opositores al Gobierno, que incluyó casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, secuestros y actos de uso excesivo de la fuerza contra varias personas críticas del Gobierno antes, durante y después de las elecciones generales celebradas en enero de 2021. También se informó de graves denuncias de ataques por parte de agentes del Estado ugandés contra miembros de la oposición en la diáspora o personas que se consideraban afiliadas a ella (véase el anexo III).

## **Emiratos Árabes Unidos**

### **Información facilitada por las fuentes**

118. Las fuentes facilitaron información actualizada sobre un caso pendiente, pero esa información se consideró insuficiente para darlo por esclarecido.

## **Uruguay**

### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por el Gobierno**

119. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Eduardo Bleier Horowitz, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses<sup>41</sup>. Al parecer, los restos del Sr. Bleier Horowitz han sido identificados y devueltos a su familia.

120. El Grupo de Trabajo agradece al Gobierno que haya aceptado la solicitud del Grupo de Trabajo de visitar el país. La visita tendrá lugar del 7 al 14 de julio de 2022.

## **Uzbekistán**

### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por el Gobierno**

121. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecidos los casos de Rahmidin Saparov y Alisher Haydarov, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses<sup>42</sup>.

## **Venezuela (República Bolivariana de)**

### **Esclarecimiento basado en la información facilitada por el Gobierno**

122. Basándose en la información facilitada anteriormente por el Gobierno, el Grupo de Trabajo decidió dar por esclarecido el caso de Freddy Alejandro Guevara Cortes, tras vencer el plazo prescrito por la norma de los seis meses<sup>43</sup>. Según se informa, el Sr. Guevara Cortes se encuentra recluido.

<sup>41</sup> *Ibid.*, párr. 150.

<sup>42</sup> *Ibid.*, párr. 152.

<sup>43</sup> *Ibid.*, párr. 155.

## Annex I

### Standard procedure cases

#### Pakistan

1. The Working Group transmitted 24 cases to the Government, concerning:
  - (a) Abdul Rab, an Afghan national allegedly abducted on 2 September 2018, at Soorkhab Camp, Quetta, Balochistan, by Pakistani military agents.
  - (b) Ain Ud Din, allegedly abducted on 14 July 2021, at his home in Karachi, by Pakistani Rangers and military agents.
  - (c) Samar Din, allegedly abducted on 15 October 2021, at his village in District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military agents.
  - (d) Saif Ullah, allegedly abducted on 18 October 2019, at his shop on Khushal Post Office, District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military agents.
  - (e) Mehtab Ullah, allegedly abducted on 29 September 2021, at his motorcycle showroom at Haso Khel, District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military agents.
  - (f) Zahir Shah, allegedly abducted on 4 June 2013, at his home in Rawalpindi, Punjab, by Pakistani military agents.
  - (g) Misbah Ullah, allegedly abducted on 29 October 2018, at his Madrassa in District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military agents.
  - (h) Saddam Hussain, allegedly abducted on 6 May 2015, at his home in District Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military agents.
  - (i) Farhad Khan, allegedly abducted on 28 April 2012, at Karkhano Market, District Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military agents.
  - (j) Nek Bar Ullah, allegedly abducted on 9 November 2021, at Khazana Military Check-Post, Tehsil Mir Ali, District North Waziristan, Khyber Pakhtunkhwa, by Frontier Corps agents.
  - (k) Gibrail Khan, allegedly abducted on 16 April 2016, at his tent at Baka Khel Refugee Camp, District Bannu, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military agents.
  - (l) Fida Ullah Khan, allegedly abducted on 14 October 2021, at Hakim Bharat Road, Tehsil Bharat, District Bannu, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military and Counter Terrorism Department agents.
  - (m) Awal Khan, allegedly abducted on 1 March 2013, at Qom Mamuzai, District Orakzai Agency, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military agents.
  - (n) Mr. Rahat Khan, allegedly abducted on 31 January 2014, at his workshop in Sangu, Post Office Barra Fort, District Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa by Pakistani military agents.
  - (o) Shams Ul Faraz, allegedly abducted on 18 June 2013, at his home in Qasba Colony, District Karachi, Sindh, by Pakistani military agents.
  - (p) Ikhlq Ahmed, allegedly abducted on 16 November 2021, at the Frontier Corps check post at Kolwai Bazar Absar, District Kech, by Frontier Corps agents.
  - (q) Noor Zaman, allegedly abducted on 5 September 2009, at a relative's house at Pegha Peshawar, by Pakistani military secret services' agents.
  - (r) Muhammad Moavia Hassan, allegedly abducted on 04 February 2019, at Nawab Town Mosque, by Pakistani military secret services' agents.

(s) Muhammad Ayyub, allegedly abducted on 28 April 2017, at Gambat National Highway Khairpur District, Sindh, by Pakistani military secret services' agents.

(t) Riaz Ahmed, allegedly abducted in 2010, at Shaheed Inwacham Hazara Tehsil Kabal Swat, Khyber Pakhtunkhwa, by Pakistani military secret services' agents.

(u) Pathan Khan Zuhrani, allegedly abducted on 11 November 2019, at Goth Haji Jungi Khan Goth Gaggar Phatak Bin Qasim Karachi Sindh, by Pakistani military secret services' agents.

(v) Saeed Ahmed, allegedly abducted on 05 August 2021, at Lateef Town, Osmania Hotel, Karachi, Sindh, by Pakistani military secret services' agents.

(w) Muhammad Abbad Gull, allegedly abducted in June 2014, at Shah Waziristan, by Pakistani military secret services' agents.

(x) Fayyaz Ali, allegedly abducted on 30 August 2021, at his home in Faqeerabad, Jail Road Quetta, Balochistan, by members of the Police Counterterrorism Department and the Frontier Corps.

## Annex II

### Urgent procedure cases

#### Russian Federation

1. Under its urgent procedure, the Working Group transmitted 26 cases to the Government concerning:

(a) Serhiy Tsyhipa, a Ukrainian national, allegedly abducted on 12 March 2022 in Nova Kakhovka, by the Russian armed forces.

(b) Oleg Baturin, a Ukrainian national, allegedly abducted on 12 March 2022, near the central bus station in Kakhovka, by the Russian armed forces.

(c) Serhiy Pryima, a Ukrainian national, allegedly arrested on 13 March 2022, in a raid on his house in Melitopol, by the Russian armed forces.

(d) Ivan Samoidiuk, a Ukrainian national allegedly abducted on 19 March 2022 at a checkpoint in Enerhodar, by the Russian armed forces.

(e) Oleksandr Babych, a Ukrainian national allegedly abducted on 28 March 2022 from the City Council of Hola Prystan, by armed men believed to belong to Russian armed forces.

(f) Victoria Andrusha a Ukrainian national allegedly abducted on 25 March 2022, in a raid on her home in Staryi Bykiv village, by the Russian armed forces.

(g) Serhiy Khrypun a Ukrainian national allegedly abducted on 24 March 2022, in a raid at his workplace in Nove village, by the Russian armed forces.

(h) Viktor Maruniak, a Ukrainian national allegedly abducted on 21 March 2022 in Stara Zbur'ivka, by officers presumably affiliated with the Russian intelligence services.

(i) Dmitry Bodyu, a national of the United States of America, allegedly arrested on 19 March 2022 in a raid at his house in Melitopol, by the Russian armed forces.

(j) Yevhen Guryanov, a Ukrainian national allegedly arrested on 18 March 2022 in a raid at his house in Bucha, by the Russian armed forces.

(k) Vadym Nikolaiev a Ukrainian national allegedly abducted on 17 March 2022, in a raid on his home in Ruski Tyshky village, by the Russian armed forces.

(l) Denys Butenko, a Ukrainian national allegedly arrested on 9 March 2022, in Bucha, by the Russian armed forces.

(m) Oleksandr Levak, a Ukrainian national allegedly abducted on 5 March 2022 in Lubomyrivka village, by the Russian armed forces.

(n) Yevhen Levak, a Ukrainian national allegedly abducted on 5 March 2022 in Lubomyrivka village, by the Russian armed forces.

(o) Mykyta Buzinov a Ukrainian national allegedly abducted on 4 March 2022, in Mykhailo-Kotsiubynske, by the Russian armed forces.

(p) Vladyslav Dmytrovych Danylenko, a Ukrainian national allegedly abducted on 24 February 2022, in an attack on the Chornobyl Nuclear Power Plant, by the Russian armed forces.

(q) Dmytro Khyliuk, a Ukrainian national and a journalist, allegedly abducted on 3 March 2022, in Kozarovychi village, by the Russian armed forces.

(r) Vasyl Volokhin, a Ukrainian national allegedly abducted on 5 March 2022, in Dymer village, by the Russian armed forces.

(s) Volodymyr Mykolaienko, a Ukrainian national and a former mayor of Kherson, allegedly abducted on 18 April 2022, in Kherson, by the Russian armed forces.

(t) Ms. Iryna Danilovich was allegedly abducted on 29 April 2022, in Koktebel, by the Russian law enforcement agents.

(u) Denys Baranchuk, a Ukrainian national, was allegedly abducted on 8 March 2022, in Bucha, by the Russian armed forces.

(v) Andrii Kanarovskyi, a Ukrainian national and a member of the Ukrainian armed forces, disappeared after being allegedly captured on 15 March 2022, near Volnovakha, by the Russian armed forces.

(w) Ms. Liliia Pavrinidis, a Ukrainian national and a member of the Ukrainian armed forces, disappeared after being allegedly captured on 18 March 2022, in an attack on Mariupol by the Russian armed forces.

(x) Roman Shulha, a Ukrainian citizen, allegedly abducted on 20 March 2022, in Tolokun, by the Russian armed forces.

(y) Ms. Liudmyla Shevchenko and Igor Steblevskyi, both Ukrainian nationals, allegedly abducted on 22 March 2022, in Hostomel village, by the Russian armed forces.

2. In accordance with the Working Group's methods of work, copies of the cases were communicated to the Government of Ukraine. Copies of the cases of Mr. Vladyslav Dmytrovych Danylenko and Mr. Denys Baranchuk were also sent to the Government of Belarus, and a copy of the case of Mr. Dmitry Bodyu, to the Government of the United States of America.

## Annex III

### General allegations

#### Brazil

1. The Working Group received information from sources concerning alleged violations and obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (hereafter, 'the Declaration') in Brazil.
2. According to the sources, in 2017, the Brazilian Parliament adopted Law No. 13.491/17,<sup>44</sup> which modified Article 9 of the Military Criminal Code, expanding the definition of military crimes in peacetime and the jurisdiction of military courts. The Law expressly expands the jurisdiction of the Military Justice of the Union to investigate and prosecute acts committed by military personnel under certain circumstances, namely, (i) in the fulfilment of duties prescribed by the President of the Republic or by the Ministry of State for Defence; (ii) in actions involving security of military institutions or military mission and (iii) in activities of military nature, including peace operations.
3. Pursuant to information received, notwithstanding the fact that the Law 13.491/17 excludes intentional killings committed by State-level military personnel, from military jurisdiction, a few months after the Law was enacted, more than a thousand proceedings were transferred from ordinary courts to military courts in the country. In connection to this, the Working Group learned of research conducted in the state of Paraná which revealed that 71% of criminal inquiries into intentional killing of civilians by State-level military personnel was followed by military police procedures.
4. It is further indicated that, in 2018, the Bahia State Court of Justice ruled on the basis of Law No. 13.491/17 that the alleged enforced disappearance of Mr. Davi Fiúza fell under military jurisdiction, transferring the case to the military justice system. Initial investigations into the alleged enforced disappearance of Mr. Davi Fiúza led to the indictment of 17 military police officers for abduction/kidnapping, murder and hiding of the body before ordinary courts of the State of Bahia. The case is reportedly currently stalled in the military justice system.
5. According to the information received, Brazil is yet to adopt legislation recognizing enforced disappearance as an autonomous crime. The Bill 6240/2013, which addresses this gap is currently pending, still awaiting the approval by National Congress.
6. The Working Group was also informed that there are currently several proceedings under Direct Unconstitutionality Action (*Ação Directa de Inconstitucionalidade*) - including actions No. 5901, 5032, 4164 and 5804 - pending before the Federal Supreme Court of Brazil, which challenge the constitutionality of Law No. 13.491/17 and the competence of military jurisdiction to investigate and prosecute crimes committed by military personnel. Notwithstanding these proceedings, the Supreme Court has shied away from ruling on such issues and has systematically postponed court sessions concerning the constitutional review of the military jurisdiction in Brazil.
7. The Working Group would like to bring to the Government's attention Arts. 2, 3, 4, 13, 14, 16 and 18 of the Declaration, which are directly related to the present allegation.
8. The Working Group would be grateful for your Excellency's Government's cooperation and observations on the following questions:
9. Please provide any additional information and/or any comment you may have on the above-mentioned allegations.
10. Please provide information on the applicable criminal legal framework to deal with allegations of enforced disappearance and clarify whether the latter is codified as a separate

<sup>44</sup> BRAZIL. Law n. 13. 491/17. 13 October 2017. Available at: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2017/lei/113491.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113491.htm) (in Portuguese).



criminal offence. If not, please provide any updates on the progress of the adoption of Bill No. 6240/2013.

11. Please provide information on the measures taken to ensure that Law No. 13.491/17 is not used to hinder the access to an impartial and independent justice system.

12. Please provide information on how your Excellency's Government ensures that persons alleged to have committed an enforced disappearance are tried only by the competent ordinary courts, to the exclusion, in particular, of military courts.

13. How does your Excellency's Government ensure that enforced disappearances are investigated and prosecuted by an independent State authority? How does it ensure that enforced disappearances are promptly, thoroughly and impartially investigated by the said authority and that no measures are taken to curtail or impede such investigations?

14. How does your Excellency's Government ensure that persons who have or are alleged to have committed enforced disappearance do not benefit from any measures that might have the effect of exempting them from any criminal proceedings or sanction, including amnesty laws?

15. Please provide information on the current status of the proceedings pending before the Federal Supreme Court of Brazil that challenge the constitutionality of Law No. 13.491/17, in particular the Direct Unconstitutional Actions No. 5901, 5032, 4164, 5804. Please explain the reasons for the repeated and ongoing postponements of the Supreme Court's sessions concerning the constitutional review of military jurisdiction.

16. Please provide information on the status of the judicial proceedings on the alleged enforced disappearance of Mr. David Fiúza and, in particular, whether such proceedings abide by international human rights standards, including the State's duty to ensure that those accused are tried solely by ordinary courts.

17. Please provide information on the measures taken to tackle and reverse the reported trend in the state of Paraná, whereby criminal inquiries into intentional killing of civilians by State-level military personnel are followed by military police proceedings.

18. The Working Group requests your Excellency's Government to provide a response to the above questions within 60 days.

## **Russian Federation**

19. The Working Group received information from the sources concerning obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (hereafter, 'the Declaration') in the Russian Federation.

20. The sources informed the Working Group that they have documented enforced disappearances of representatives of local authorities, journalists, civil society activists, retired servicemen of the armed forces, especially those who took part in the hostilities in 2014-2021, as well as regular civilians committed by Russian armed forces and affiliated armed groups in the recently occupied Ukrainian territories of Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kyiv, Mykolaiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Poltava and Chernihiv regions. The highest number of cases has been recorded in the Kyiv, Kherson and Zaporizhzhia regions. Several of the enforced disappearances were presumably carried out by members of the Russian intelligence agencies, as witnesses noted the specific manner of communication, the different uniforms from those of the regular Russian military, and the usage of the special equipment.

21. According to one of the sources, between 24 February 2022 and 29 April 2022, there have been recorded 293 cases of enforced disappearances. Six persons were found dead, 121 were released, and the whereabouts of 166 people remain unknown. Another source alleges 139 cases of enforced disappearances during the same period. There is still no information about the fate and whereabouts of 65 persons, 67 persons were released, 7 were found dead or died after their release in the aftermath of torture endured in captivity. The real number of enforced disappearances is likely higher.

22. The sources report that Russian armed forces and affiliated armed groups have held abducted persons in improvised places of detention, including in schools, buildings of government institutions, warehouses, barns, and industrial buildings in the territory of Ukraine under their control. After several days or weeks of secret detention, many of the victims were reportedly transferred to the territory of the Russian Federation, Crimea or the territory of Donetsk and Luhansk regions controlled by the Russian affiliated armed groups before 24 February 2022. They were then held there in penal institutions.

23. Four families, according to the sources, have shared with them reliable information that their abducted relatives are being held in the detention facilities in the Bryansk and Kursk regions of the Russian Federation. In one instance, the family learnt about the transfer to Russia from news on Russian television. In all four cases, relatives of the victims of enforced disappearances still do not have any official information from Russia regarding the whereabouts and state of health of these individuals. According to the sources, this exemplifies a more general practice of transfers of captives from Ukraine to the territory of the Russian Federation.

24. The sources further assert that, commonly, relatives of Ukrainian prisoners of war (hereinafter ‘POWs’) cannot obtain information about their place of detention and their fate. Reportedly, neither the Russian Federation nor affiliated armed groups have created information bureaus, as required under the 1949 four Geneva Conventions. The sources state that they have received information about Ukrainian POWs being held in penal institutions together with abducted civilians and presumably some of them have been released during so-called ‘exchanges of prisoners of war’ held between Ukraine and the Russian Federation. There is no reliable information about the procedures followed in the course of such ‘exchanges’. At the same time, there are grounds to believe, as the sources maintain, that some of the victims of the enforced disappearance were ‘exchanged’ for Russian POWs.

25. While in captivity, several forcibly disappeared persons, as the sources allege, have been subjected to torture and ill-treatment by Russian military personnel or intelligence agents. In particular, reappeared persons have allegedly given testimony that, while being forcibly disappeared, they were kept tied and blindfolded for several days, were provided no or scarce food, and were held in overcrowded rooms with no sanitation. In particular, the sources have received reliable confirmation about the use of torture on abducted Ukrainian civilians in the Pre-trial Detention Center № 2 of the Novozybkov town, Bryansk region.

26. The Working Group would like to bring to the Government’s attention Arts. 2, 4, 7, 10, 12, 13 and 19 of the Declaration, which are directly related to the present allegation.

27. The Working Group would be grateful for your Excellency’s Government cooperation and observations on the following questions:

28. Please provide any additional information and/or any comment you may have on the above-mentioned allegations.

29. Please inform on how the Government ensures that families of allegedly forcibly disappeared persons can exercise their right to complain to a competent and independent State authority and to have that complaint promptly, thoroughly and impartially investigated by that authority.

30. Please inform of any searches of allegedly forcibly disappeared persons and investigations undertaken into alleged enforced disappearances committed in Ukraine by the armed forces and intelligent agencies of the Russian Federation, and affiliated armed groups. Please inform about the applicable law, including what criminal law provisions codify enforced disappearance as a separate criminal offense, and share the results of the searches and investigations.

31. Please inform on how the Government ensures that persons deprived of their liberty are held in an officially recognized places of detention and accurate information on the detention of such persons and their place or places of detention, including transfers, is made promptly available to their family members, their counsel or to any other persons having a legitimate interest in the information. What are the rules and procedures to prevent ill-treatment, including the torture, of detainees?

32. Please provide information on how the Government ensures that Ukrainian prisoners of war (POWs) are treated in accordance with international humanitarian law, including how families of POWs can obtain information about their whereabouts and their fate. Has the Russian Federation set up information bureaus, as required under the 1949 four Geneva Conventions? Please explain the rules and procedures, and practices on the exchanges of POWs of war between Ukraine and the Russian Federation. Is true that some Ukrainian civilians have been exchanged for Russian POWs?

33. Please inform on how your Government ensures the right of victims of enforced disappearance and their relatives to an effective remedy, including cessation of violations, restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.

34. The Working Group requests your Excellency's Government to provide a response to the above questions within 60 days.

## Rwanda

35. The Working Group received information from sources concerning alleged violations and obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (hereafter, 'the Declaration') in Rwanda.

36. According to information received there is a practice of enforced disappearances of Rwandan political opponents, human rights defenders, journalists, and other perceived critics of the Government, both within and outside the country.

37. According to the sources, the current regime has engaged in a systematic campaign of targeting anyone who expresses any form of opposition or dissenting opinion, particularly those whose views differ from the Government's narrative on genocide.

38. It has been reported that the patterns of enforced disappearance in the country start as early as 1993 and continued throughout these years. Between 1993 and 2004, the practice of enforced disappearance reportedly mainly targeted Hutus for a variety of reasons, including their perceived affiliation to the former Hutu-dominated regime, allegations of crimes committed during the genocide, and attempts to reduce the majority of Hutus.

39. It has been reported that Rwandans who have attempted to draw attention to allegations of crimes committed by the Rwanda Patriotic Front (hereafter, 'RPF') have been subjected to several human rights violations, including enforced disappearance. It is further reported that Hutu survivors of RPF crimes, who sought information from authorities on the fate and whereabouts of their loved ones, were often targeted, while those who tried to hold members of the RPF accountable during grassroots Gacaca hearings also faced persecution or prosecution. According to the information received, witnesses of RPF crimes who were believed to be willing to testify before the United Nations International Criminal Tribunal for Rwanda (hereafter, 'ICTR') were threatened in some form, often subjected to enforced disappearance, within Rwanda and in the neighbouring countries where they had fled, including Uganda, Tanzania, Zambia, Burundi, Kenya or the Democratic Republic of Congo (hereafter, 'DRC').

40. According to the information received, the practice of enforced disappearance targeting refugees – which commenced after the 1994 genocide - continues until today. It is reported that, between 1996 and 1997, the Rwandan Defence Force (hereafter, 'RDF') have conducted several security operations in the eastern part of the DRC to track down members of the Rwandan Armed Forces, leading to the killing and enforced disappearance of thousands of Rwandan refugees, mainly Hutus. Within this context, it is further reported that, between March and September 2014, the Government conducted military operations in the districts bordering DRC, resulting in the enforced disappearance and killing of hundreds of refugees. The fate and whereabouts of at least 150 people who disappeared in those circumstances remain unknown. In addition, Rwandan refugees who tried to raise international awareness of, or were willing to talk about, RPF crimes were allegedly tracked down and killed or disappeared; including former RPF soldiers who were willing to testify before a French court regarding the downing of the presidential plane on 6 April 1994, that triggered the genocide.

41. The information received further refers to the practice of enforced disappearance against Tutsis who were part of the RPF's ruling inner circle and who subsequently fell out of favour with the Government.

42. The Working Group has also received information that Rwandese, including journalists and civil society actors who have been outspoken critics of the RPF's political and economic governance, have mysteriously disappeared ahead in the run-up to the 2015 Constitution referendum, which amended the presidential term limits and the 2017 presidential elections. Furthermore, according to the sources, since the referendum, the Government has increased its crackdown on potential political opposition, with the ongoing targeting, intimidation, and harassment and enforced disappearance of those opposed to the Government.

43. According to the information received, the practice of enforced disappearance has also included the targeting of the Rwandan diaspora activists who have sought to raise awareness about the human rights abuses happening in Rwanda and who were living in various African countries, as well as in the United States of America, Australia and Europe.

44. The information received further highlights patterns of transnational enforced disappearance, targeting Rwandan living abroad. In such circumstances, while some of the victims later reappear in a Rwandan Court; others' fate and whereabouts remain unknown. It is further alleged that, in order to carry out successful operations against its own citizens abroad, the Government of Rwanda likely relies on the co-operation of other Governments.

45. The sources also reported that information and communication technology (hereafter, 'ICT') has been used in the furtherance of the practice of enforced disappearance. It has been mentioned that, in the more recent cases of enforced disappearance, after the victims have been forcibly disappeared, their cell phones were disconnected. Furthermore, according to the information received, surveillance software such as Pegasus has been used to monitor the WhatsApp messaging services of the targeted individuals. It is further stated that several high-profile critics of the regime, including opposition members and commentators who have used social media or YouTube to express themselves were subjected to enforced disappearance.

46. It is reported that Rwanda does not have specific legal provisions criminalising enforced disappearance as an autonomous offence and the existing legislation fails to offer sufficient protection against this crime, leaving persons vulnerable to the discretionary practices of the institutions holding criminal justice powers. Pursuant to the information received, several key provisions, including in the Penal Code and in the legislation concerning genocide ideology, have been drafted in a vague and ambiguous manner, therefore enabling politically motivated judicial proceedings of persons previously subjected to enforced disappearance, as well as the crack down on civic spaces, i. e., the suppression of political dissent, limitation of registration and operation of independent non-governmental organizations.

47. According to the information received, while families reported the cases of enforced disappearance to several State institutions, including the Rwandan Investigation Bureau, the Ministry of Justice, and the National Human Rights Commission, little progress has been made in uncovering the fate and whereabouts of the disappeared or in holding accountable the perpetrators of such crimes, in particular, when concerning civilian officials and some members of State security forces.

48. The Working Group would like to bring to the Government's attention Arts. 1, 2, 3, 4, 6, 9 and 13 of the Declaration, which are directly related to the present allegation.

49. The Working Group would be grateful for your Excellency's Government's cooperation and observations on the following questions:

50. Please provide any additional information and/or any comment you may have on the above-mentioned allegations.

51. Please explain what measures have been taken by your Government to ensure that Rwandese people, including journalists, human rights defenders and lawyers and political

opponents can carry out their activities without any fear of threat of enforced disappearance or any other restrictions.

52. Please inform on how does your Government ensure the right to a prompt and effective judicial remedy as a means of determining the fate and whereabouts of persons deprived of their liberty?

53. Please provide information on how does your Government ensure that any person, having knowledge or legitimate interest, who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance is able to lodge a complaint to a competent and independent State authority? How does your Government ensure that complaints are promptly, thoroughly and impartially investigated by that authority? What steps does your Government take to protect relatives of disappeared persons from any form of reprisals?

54. How does your Government ensure the right of victims and their relatives to an effective remedy, which should at minimum guarantee cessation of violations, restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition?

55. Please indicate any measures taken by the Rwandan Government to stop and prohibit targeted violence, including the practice of enforced disappearance, against Hutus.

56. Please list concrete measures taken to stop the practice of enforced disappearance allegedly committed by Rwandan security forces within and outside the country and to investigate on the corresponding allegations, identify those responsible and hold them accountable.

57. Please provide detailed and updated information on the status of investigations on all the case cases of enforced disappearance that have been reported to State institutions including, the Rwanda Investigation Bureau. Kindly inform on the measures in place to search for disappeared persons and establish their fate and whereabouts.

58. Please provide information on measures taken to prevent the use of surveillance software for illegal purposes, including the monitoring of communications of individuals. Please provide information on the measures taken to guarantee freedom of expression, including online, without the fear of being subjected to enforced disappearance.

59. Please provide information on the applicable criminal provisions vis-à-vis enforced disappearance, specifying whether the latter is codified as an autonomous offence under the domestic legislation, sanctioned with penalties that are commensurate to its extreme seriousness.

60. Please provide information on enforced disappearances of Rwandan citizens, including refugees, allegedly perpetrated abroad – both in neighbouring countries and in other continents. What measures have your government taken to afford to other States the greatest measures of mutual legal assistance in connection with criminal investigations and proceedings. Similarly, which measures are taken by Rwanda to afford other States assistance to support victims of enforced disappearance and, in the event of death, exhuming, identifying and returning their remains?

## **Sri Lanka**

61. The Working Group received information concerning alleged violations and obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (hereafter, ‘the Declaration’) in Sri Lanka.

62. According to the sources, in the last months of 2021 and the first trimester of 2022, relatives of disappeared persons have increasingly been subjected to harassment and intimidation, including through threatening phone calls at night, surveillance and unannounced visits by public officials and law enforcement officers.

63. Pursuant to the information received by the Working Group, the notorious repressive technique of the so-called ‘white van arrests’, widely used by State forces during the armed conflict (1983–2009) to target opponents and dissidents, has seemingly been used anew in a few occasions in the first months of 2022. In this context, the Working Group was informed

of at least two incidents in different areas of the country (i.e. Kalmunai and Kalutara) where unidentified men claiming to be affiliated to State agencies approached in a white van two persons known to be involved in protests and political activities, in one case threatening and arresting the person concerned and, in the other, attempting to kidnap the person. Reportedly, none of the incidents was subjected to a thorough, independent and impartial investigation.

64. According to the information provided by the sources, associations of families of disappeared persons have also been experiencing interferences in their attempts to gather, mark anniversaries (including the International Day of the Victims of Enforced Disappearance) or to protest, including efforts to pre-emptively forbid their demonstrations through court orders – often under the pretext of COVID-19 restrictions – and taking photographs during their assemblies or using force against protestors. These incidents have been reported especially in the northern provinces of the country. Moreover, sources informed the Working Group about obstacles encountered in legally registering associations of relatives of disappeared persons and the corresponding implications on their ability to exercise their right to form and participate freely in organisations.

65. The sources further indicate that, over the past months, relatives of disappeared persons also faced an increasing number of obstacles in their quest for truth, justice and redress. On the one hand, the process of appointing the members of the Office of Missing Persons (hereinafter, ‘OMP’) has been reportedly lacking in transparency, undermining the trust of relatives of disappeared persons in the independence and impartiality of this institution, and seemingly impairing its regular functioning.<sup>45</sup> Furthermore, the Government has allegedly suspended – without any apparent justification – the payment of a monthly allowance as interim relief to families of disappeared persons.

66. Moreover, pursuant to the information submitted by the sources, also the issuing of certificates of absence due to enforced disappearance with the purpose to regulate the legal situation of disappeared persons has ceased, while relatives are increasingly subjected to pressure to declare their loved ones dead. Allegedly, the fact that a disappeared person is declared dead negatively affects the continuation of criminal investigations and search activities.

67. The Working Group was also informed that the few ongoing proceedings against persons accused of having committed gross human rights violations, including enforced disappearances, are stalling. In particular, where those accused are members of the military, they complained of having been ‘politically targeted’. This has triggered the intervention of the Presidential Commission of Inquiry into ‘political victimization’ (established in 2020), which usually resulted in the recommendation that all the suspects in the ongoing proceedings should be acquitted and, instead of being subjected to any sanction, rewarded for their service. In these cases, according to the information received, the Presidential Commission of Inquiry recommended instead disciplinary action and/or the prosecution of the police officers who had conducted the investigation, lawyers and magistrates involved in the trials, under charges including ‘fabricating evidence’ or ‘corruption’.

68. The Working Group would like to bring to the Government’s attention Arts. 2, 7, 13, 16 and 19 of the Declaration, which are directly related to the present allegation.

69. The Working Group would be grateful for your Excellency’s Government cooperation and observations on the following questions:

70. Please provide any additional information and/or any comment you may have on the above-mentioned allegations.

71. Please inform on the actions taken to prevent any instance of harassment, intimidation or reprisal against relatives of disappeared persons and their representatives and, where such incidents are reported, to ensure that they are promptly subjected to a thorough, impartial, independent investigation and those responsible are appropriately punished.

---

<sup>45</sup> The Working Group recalls the concerns already expressed in this regard, as well as the corresponding recommendations. See, among others, A/HRC/51/Add.2, para. 79; A/HRC/42/40/Add.1, para. 7; and joint allegations with other Special Procedures LKA 1/2020, 6/2020, 7/2020 and 5/2021.

72. Please inform on any investigations undertaken into arrests or attempts of kidnapping allegedly committed in the first trimester of 2022 by groups of men approaching their targets in white vans and identifying themselves as State agents.

73. Please provide information on the measures taken by your Excellency's Government to guarantee the right to form and participate freely in organizations and associations concerned with attempting to establish the circumstances of enforced disappearances and the fate of disappeared persons, and to assist victims of enforced disappearance. In particular, please specify how the Government ensures the full respect of the rights to freedom of movement, expression, and association as well as the right of peaceful assembly in the context of gatherings, commemorations and protests organised by relatives of disappeared persons. Moreover, please clarify what is the applicable legal framework and the process to legally register an association of relatives of disappeared persons.

74. Please provide information on the process of selection of the members of the OMP and the current situation – in terms of human, technical and financial resources – of the institution, as well as the measures taken to ensure that it continues carrying out its mandate in an independent, impartial and effective manner.

75. Please, provide information on how your Excellency's Government ensures the right of victims and their relatives to an effective remedy, which should at minimum guarantee cessation of violations, restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.

76. Please inform on the reasons for suspending the payment of monthly allowances as interim relief to relatives of disappeared persons and whether there is any prospect of resuming such a payment in the near future.

77. Please provide information on why the issuing of certificates of absence due to enforced disappearance would have ceased and kindly illustrate what are the legal effects of declaring dead a disappeared person with regard to search activities and ongoing criminal investigations.

78. Please inform on how your Excellency's Government ensures that persons who have or are alleged to have committed an enforced disappearance do not benefit from any measures that might have the effect of exempting them from any criminal proceedings or sanction.

79. Please inform on the measures taken to ensure that persons participating in the investigation and prosecution of cases of enforced disappearance are protected against ill-treatment and any form of intimidation, including through threatening to subject them to criminal proceedings for their involvement in the investigations.

80. The Working Group requests your Excellency's Government to provide a response to the above questions within 60 days.

## **Türkiye**

81. The Working Group received information from the sources concerning obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (hereafter, 'the Declaration') in Türkiye (Republic of).

82. According to the sources, under the current criminal legislation, enforced disappearance is not codified as a separate crime, which renders extremely difficult, if not virtually impossible, to hold perpetrators accountable. On the one hand, this allegedly entails an enhanced burden of proof, which does not reflect the peculiarities of this crime, that is by nature shrouded in secrecy and where some information and evidence are not available to the relatives of the disappeared person. On the other hand, this has allegedly resulted into the discontinuation of several cases of enforced disappearance, due to the failure to comply with the said burden.

83. The sources informed the Working Group that, in the absence of a separate crime of enforced disappearance in the domestic Criminal Code, in the few cases that are actually investigated, prosecutors refer to the provisions concerning homicide. Under the applicable

criminal legislation, the prosecution of homicide is subjected to a statute of limitations of 20 years. Allegedly, this has already expired for most of the cases of enforced disappearances begun in the Nineties and the Turkish Constitutional Court already found such a state of limitation to be acceptable.

84. The allegations received by the sources and summarised in the two previous paragraphs seem to confirm the concerns expressed by the Working Group in its report on the country visit conducted in March 2016 (A/HRC/33/51/Add.1, paras. 15-20) and its subsequent follow-up report (A/HRC/45/13/Add.4, para. 13). The Working Group formulated specific recommendations to overcome the obstacles identified.

85. Additionally, sources reported that relatives of disappeared person have been facing unjustified interferences in their right to form and participate freely in associations concerned with attempting to establish the circumstances of enforced disappearances and the fate and whereabouts of disappeared persons and to assist victims. In particular, their gatherings and manifestations have allegedly been forbidden. These allegations seem to reflect concerns expressed by the Working Group in its follow-up report on the country visit (A/HRC/45/13/Add.4, paras. 18 and 22), which were the object of dedicated recommendations.

86. Moreover, the criminal prosecution of relatives of disappeared persons under the charges of 'unlawful participation to protests' is reportedly being used to trigger a chilling effect on civil society. According to the information received by the sources, criminal charges have been pressed against relatives of disappeared persons who are more than 80 years old, with the intention to stall their attempts to seek justice and redress for the harm suffered and to establish the fate and whereabouts of their loved ones.

87. The Working Group would like to bring to the Government's attention Arts. 2, 3, 4, 13 and 17 of the Declaration, which are directly related to the present allegation.

88. The Working Group would be grateful for your Excellency's Government cooperation and observations on the following questions:

89. Please provide any additional information and any comment you may have on the above-mentioned allegations.

90. Please provide information on the applicable criminal legal framework to deal with allegations of enforced disappearance and clarify whether the latter is codified as a separate criminal offence.

91. In case of the absence of a separate crime of enforced disappearance under Turkish legislation, please inform on which are the offences used in criminal investigations and which is the applicable statute of limitation. Kindly inform on how this reflects the continuous nature of an enforced disappearance.

92. Is any legislative reform envisaged in order to assure that enforced disappearance is codified as a separate offence under domestic criminal legislation and is sanctioned in a way that is commensurate to the gravity of the crime?

93. How does the application of a 20-year statute of limitation take into account the permanent nature of the crime of enforced disappearance and its continuous nature as a violation of multiple human rights?

94. What is the progress made in the implementation of the recommendations formulated by the Working Group in its country visit report (A/HRC/33/51/Add.1, para. 68) and in the subsequent follow-up report (A/HRC/45/13/Add.4, paras. 13, 18 and 22) concerning existing loopholes in the applicable legislation (notably, with respect to the lack of progress in relation to qualifying enforced disappearances as an autonomous crime and the applicable 20-year statute of limitation) and instances of harassment against family members of disappeared persons and hindrances in the exercise of their freedom of association and assembly?

95. How does your Government secure that persons alleged to have committed an enforced disappearance are suspended from any official duties during the investigation of the corresponding complaint?



96. How does your Government ensure that any person, having knowledge or legitimate interest, who alleges that a person has been subjected to enforced disappearance is able to lodge a complaint to a competent and independent State authority? How does your Government ensure that enforced disappearances are promptly, thoroughly and impartially investigated by the authority even if there has been no formal complaint?

97. How does your Government guarantee the right to form and participate freely in organisations of relatives of disappeared persons or working to support them? In particular, what are the preventative measures put in place to ensure that the pressing of criminal charges against human rights defenders and relatives of enforced disappearance is not used to silence them?

98. What are the measures taken to ensure that all those involved in the investigation of an enforced disappearance, and, in particular, witnesses, complainants and their relatives, are protected against reprisals and intimidations?

99. Has any investigation into alleged reprisals against relatives of disappeared persons and their representative organisations been carried out? If not, what are the reasons? Otherwise, what are the results or progress of such investigations?

100. The Working Group requests your Excellency's Government to provide a response to the above questions within sixty days.

## Uganda

101. The Working Group received information from credible sources concerning reported obstacles encountered in the implementation of the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance in Uganda.

102. It was reported that before, during and after the January 2021 general election, the authorities reportedly embarked on a massive campaign of terror against civilian population that was opposed the Government. The Security Forces conducted a series extrajudicial killings, excessive use of force, illegal arrests, detentions, abductions of several government critics. After the general elections, there was a public outcry reflecting an increase of allegations of people gone missing before, during and after the general elections. The Government recognized having a large number of people under detention in connection to penal offenses allegedly related to the electoral process. According to the allegations, there were a large number of people who were kidnapped by security forces. Victims of the alleged kidnaps by security forces were reportedly tortured, raped and often kept in unauthorized detention centers commonly known as "safehouses". According to the information received, the detention centers -which were non gazetted to hold civilians- were operated by the Uganda People's Defence Forces (UPDF), especially the Special Forces Command (SFC), the Chieftaincy of Military Intelligence (CMI), and Military Police (MP).

103. The wave of abductions and torture by security forces reportedly intensified during the pre-election campaign period in the second semester of 2020 through the January 2021 general election, resulting in a dramatic increase in the number of reported cases of enforced disappearance in the country. On 4 March 2021, Uganda's Internal Affairs Minister admitted and tabled before parliament a list of 177 civilians believed to be held under detention.

104. The sources further indicated that men and women were illegally detained in various safehouses around the country. Some victims were held in military detentions and others were tried before the court martial, while other individuals were abducted by security forces and their whereabouts remain unknown. Some detainees who were tortured reported psychological and physical harm including broken backs, fingernails pulled out, genitals beaten, electrocution and burns; some women reported that they were raped by security forces while under detention. In some instances, breastfeeding mothers were snatched away from their babies and detained in safehouses for long periods of time. Security forces also reportedly abducted and illegally detained minor children at gunpoint.

105. Serious allegations were also reported regarding attacks on members or persons with perceived affiliation with the opposition in the diaspora by Ugandan State agents.

106. The sources further listed numerous cases of persons allegedly forcibly disappeared and for which the fate and whereabouts remain unknown to this day.
107. The Working Group would like to bring to the Government's attention Arts. 2, 3, 7, 9, 10, 13, 16 and 19 of the Declaration, which are directly related to the present allegation.
108. The Working Group would be grateful for your Excellency's Government cooperation and observations on the following questions:
109. Please provide any additional information and/or any comment you may have on the above-mentioned allegations.
110. Please inform on any investigations undertaken into allegations of arrests, arbitrary detention or enforced disappearances reportedly committed during or in the aftermath of the electoral period in 2020-2021 against opposition organizers, campaign staff, members and their supporters.
111. What steps does Your Excellency Government take to ensure that any ill-treatment, intimidation or reprisal or any other form of interference against the persons mentioned in the previous point is subjected to a prompt, thorough, independent and impartial investigation and those responsible are prosecuted and appropriately punished?
112. Please provide information on how does Your Excellency Government ensure that persons alleged to have committed an enforced disappearance are tried only by the competent ordinary courts, to the exclusion, in particular, of military courts.
113. How does Your Excellency Government ensure the right to a prompt and effective judicial remedy as a means of determining the whereabouts of persons deprived of their liberty?
114. How does Your Excellency Government ensure that persons who have or are alleged to have committed enforced disappearance do not benefit from any measures that might have the effect of exempting them from any criminal proceedings or sanction?
115. Please provide information on how Your Excellency Government ensure the rights of persons deprived of liberty, notably measures on gender sensitivity for women, including breastfeeding mothers who were detained in safehouses and were reportedly snatched away for long periods of time from their babies and children.
116. How does Your Excellency Government ensure the right of victims and their relatives to an effective remedy, which should at minimum guarantee cessation of violations, restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition?

## Annex IV

### Intersessional activities of the members

1. On 17 February 2022, Luciano Hazan participated as a speaker in the presentation of the request of precautionary measures related to military archives to the Jurisdiction for the Peace in Colombia, organized by the Fundación “Hasta Encontrarlos”.
2. On 23 February 2022, Aua Baldé attended: PUC-Rio/IBAHRI informal Consultation with UN Treaty Bodies and Special Procedures.
3. On 23-24 February 2022, Henrikas Mickevičius participated in an expert meeting on the issue of missing persons in Syria, in Glion, Switzerland.
4. On 9 March 2022, Gabriella Citroni gave a speech on the “*Human Rights Obligations vis-à-vis Missing Migrants*”, in the webinar “*Missing Migrants, Missing Solutions? Preventing and resolving missing migrants cases and addressing the needs of their families through the Global Compact on Migrants*”, organized by the International Committee of the Red Cross and the International Organization for Migrations.
5. On 14 March 2022, Gabriella Citroni and Luciano Hazan intervened in a webinar on “*Retos y perspectivas a diez años del informe de misión a México del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias*”, organized by the Office of the High Commissioner for Human Rights in Mexico, Ciudad de México.
6. On 29 March 2022, Gabriella Citroni and Luciano Hazan gave an interview for the Mexican newspaper “Proceso”, available at: <https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/3/29/desapariciones-una-crisis-que-se-acerca-las-100-mil-victimas-283295.html>.
7. On 29 April 2022, Luciano Hazan participated as a speaker in a webinar organized by the Penitentiary Ombudsperson of Argentina on “Enforced disappearance: From the dictatorship to democracy”.
8. On 6 May 2022, Henrikas Mickevičius attended, on the margins of the Brussels VI Conference on Supporting the Future of Syria and the Region, an event on “Moving Forward on Truth and Justice: Addressing the crisis of missing persons and detention in Syria”.